

# El desprestigio de la política: lo que no se discute

BEATRIZ STOLOWICZ

Profesora-investigadora del Departamento de  
Política y Cultura, Área Problemas de América  
Latina. Universidad Autónoma Metropolitana,  
unidad Xochimilco (México).

TEORÍA POLÍTICA

## El problema

Casi es un lugar común reconocer el desprestigio actual de la política, de los partidos y de los políticos. El fenómeno es común a toda América Latina, a pesar de las diferencias observables en las realidades políticas entre los países. Una primera manifestación de este desprestigio es el rechazo al elitismo político, que se expresa en afirmaciones como “todos los políticos son iguales”, “se representan a sí mismos”, “no luchan por ideas, sino por prebendas”, “se han alejado de la gente”. En estas expresiones de rechazo existe un fuerte componente ético, que descalifica a los políticos de manera personal y, por extensión, a la política en general.

Es un cuestionamiento compartible ante el cual no cabe la neutralidad de valoración, entre otras razones, por las trágicas consecuencias políticas que tiene. Pero cuando nos encontramos ante un fenómeno de tal grado de generalidad, la personalización del mismo es insuficiente para explicarlo y, más aún, para tratar de transformarlo. Es necesario llegar a explicaciones consistentes que vayan más allá de las enjundias descriptivas con que se plantean las críticas actuales.

Cabría preguntarse si es algo verdaderamente novedoso el que existan en América Latina prácticas políticas como las que hoy se cuestionan. La respuesta es negativa, pues entre el sector mayoritario de la clase política latinoamericana éstas han sido sus prácticas tradicionales. La historia de los partidos tradicionales en América Latina ha sido la de la manipulación clientelista, los acuerdos entre las cúpulas de las fracciones dominantes y la demagogia y, con escasas excepciones, la del enriquecimiento personal o empresarial a partir de los cargos públicos. Hoy existe un mayor cuestionamiento a estas prácticas políticas tradicionales por dos razones: primero, porque se impuso la idea de que ellas eran características de los “populismos”<sup>1</sup> latinoamericanos y que sólo se eliminarían con la modernización liberal de los sistemas políticos, lo cual en ningún caso ocurrió, sino que se agravó; segundo, porque la política tradicional se amparaba en políticas estatales desarrollistas que realizaban una relativa distribución del ingreso, sobre todo a los sectores medios urbanos, que atemperaban la percepción de la política institucional como botín de una élite, como hoy se le percibe.

El desprestigio de los partidos puede vincularse a la crisis de representación que éstos tienen respecto a los intereses de vastos sectores

---

1. Uso el entrecomillado porque la prédica de la derecha liberal oculta que el populismo ha sido una política burguesa de alianzas policlasistas con las cuales encaró la lucha antioligárquica de las primeras décadas del siglo XX y la modernización capitalista desarrollista que le siguió. El capitalismo actual no admite dichas alianzas con fracciones populares y por eso los neoliberales construyen la leyenda negra del populismo como el horror plebeyo de izquierda al cual anatemizar, como su alter ego, cuando en realidad fueron ellos sus protagonistas directos. Nunca fue una política de izquierda en la región.

de la población latinoamericana; y esto ocurre, precisamente, cuando se han generalizado en la región los sistemas representativos liberales, identificados como *la democracia*, pero que funcionan en la reproducción de un capitalismo cada vez más explotador y más excluyente.

Lo novedoso es que un componente de la modernización neoliberal de los sistemas políticos sea la creciente presencia en ellos de varios partidos de izquierda, que llegan a ganar elecciones de gobiernos locales y a aumentar de modo considerable sus representaciones parlamentarias. La izquierda gana elecciones porque amplios sectores cuestionan al neoliberalismo pero, paradójicamente, esta izquierda desarrolla su representación de intención crítica según las reglas del juego que garantizan la estabilidad política de la reproducción capitalista neoliberal.

Los éxitos del sistema dominante en inducir la integración de varios de estos partidos de izquierda a sus concepciones y reglas del juego, ya sea como vocación o prácticas parlamentaristas, hacen que el rechazo les sea extensivo (“todos son iguales”). Y tal vez éste sea el componente que causa más irritación y más frustración en amplios sectores de la propia izquierda respecto de “la política”, por lo cual toman distancia de los partidos con representación parlamentaria.

En los años recientes, estos sectores de izquierda no partidaria han comenzado a tener una presencia política importante y se han reorganizado en diferentes movimientos y organizaciones sociales, que van cohesionándose en torno de dos elementos comunes: su lucha contra el neoliberalismo y su negación de la política y de los partidos, en un plano de contradicción dicotómica entre lo social y lo político<sup>2</sup>, al punto de que se habla de una “izquierda social” en contraposición a una “izquierda partidaria”.

Los rechazos de la primera a la segunda no constituyen todavía una crítica consistente, porque no logra superar los parámetros analíticos e ideológicos dominantes de la política. Se niega la política en general, con el supuesto de que esto que observamos hoy como la “política realmente existente”, es su única forma de existencia posible. De igual manera, se niegan los partidos en general, con el supuesto de que “así son” los partidos. Es una visión ahistórica que hace tabla rasa de experiencias previas diferentes, y que no se interroga por las causas de los cambios. La carencia de autocríticas serias sobre la crisis de la izquierda tras las derrotas políti-

---

2. El distanciamiento entre los partidos de izquierda y las organizaciones sociales fue una confirmación asumida en los debates del X Encuentro del Foro de São Paulo (FSP), en La Habana (diciembre 2001). El documento que el FSP envió al II Encuentro del Foro Social Mundial, en Porto Alegre (enero-febrero 2002), invitando a encarar la “socialización de la política y la politización de lo social”, expresa una sensibilidad que aún no se refleja en análisis teóricos y políticos equivalentes.

cas en la región, sobre los impactos de la crisis del llamado socialismo real, y sobre las verdaderas limitaciones teóricas por rectificar, abona que sean las críticas burguesas a los partidos de izquierda las que se impongan.

Lo que debe reconocerse es que, más allá de sus limitaciones conceptuales, el cuestionamiento a los partidos ha tenido un impacto considerable. En general, todos incorporan ese asunto en sus discursos. En el caso particular de los de izquierda, el acuse de recibo se acompaña de la confirmación empírica del alejamiento político de amplios sectores de sus bases sociales tradicionales<sup>3</sup>. Pero de ningún modo esto está propiciando análisis autocríticos consistentes, fundamentados en una revisión profunda de sus concepciones sobre la política.

A lo sumo, entre los sectores partidarios más sensibles a esta problemática se hacen declaraciones en cuanto a *voluntad política* para buscar el acercamiento con los sectores sociales. Pero otros grupos de los mismos partidos fundamentan su diagnóstico en retrasos en los procesos “modernizadores” encarados ya por los partidos, como si se necesitara aún “más de lo mismo”.

De estas falencias tanto en las críticas como en las autocríticas emerge el enorme desconocimiento que existe entre la izquierda sobre lo que es el *liberalismo* como *proyecto político conservador de la burguesía en el poder*. Todavía se asocia el liberalismo fundamentalmente con las manifestaciones ilustradas y libertarias del discurso antioligárquico, enarbolado por algunos intelectuales y políticos, que quedó en el imaginario político latinoamericano como un pendiente histórico virtuoso. Y esto ha sido así, entre otras razones, porque en América Latina el liberalismo sólo ha sido el modelo político predominante desde la década de 1990<sup>4</sup>.

Antes de 1970 el sistema representativo liberal era excepcional: sólo en Chile, Uruguay, y en menor medida en Costa Rica, tuvo una existencia prolongada y con legitimidad social. En el resto de los países la generalidad ha sido la de regímenes autoritarios dictatoriales o de tipo corporativo, o con estructuras de poder oligárquico modernizado, en los cuales las elecciones y los parlamentos eran sólo una fachada republicana. Por ello, en la mayor parte de la región, las luchas políticas de los dominados (y la conquista de libertades liberales) se desarrollaron al margen

3. Esto se observa hoy en partidos como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en México, pero también está presente con otra intensidad en las discusiones del Frente Amplio (FA) en Uruguay, por mencionar algunos.

4. Análisis con mayor amplitud estas cuestiones en “Democracia gobernable: instrumentalismo conservador”, en *Cuadernos de Nuestra América*, vol. XIV, n° 28, julio-diciembre, La Habana: Centro de Estudios sobre América, 2001, publicado como capítulo en el libro *Vigencia y actualización del marxismo en el pensamiento de Rodney Arismendi*, Montevideo: Fundación Rodney Arismendi, noviembre de 2001.



de las lógicas y las prácticas representativas liberales: desde las guerrillas (anteriores a la Revolución cubana, como en el caso colombiano, y de manera más amplia después de 1959) hasta acciones políticas marginales y formas corporativas.

Si para muchas izquierdas latinoamericanas la acción política en el marco de la democracia liberal es una experiencia inédita, las circunstancias actuales les plantean desafíos teóricos y políticos mucho mayores, pues se trata del modelo más conservador de democracia liberal, la *democracia gobernable*, cuya finalidad es administrar y legitimar políticamente el orden social más antidemocrático que haya tenido América Latina, con grados de desigualdad social y regresiones excluyentes incomparables.

La crisis de representación que acusan los partidos de izquierda tiene como trasfondo los cambios en la estructura social originados por el nuevo capitalismo, que ha modificado las formas de existencia de los grupos sociales que busca representar: la clase obrera industrial ha perdido peso específico en el mundo de los explotados; éste, además, está diversificado y disperso económica y socialmente; las diferenciaciones entre los sectores medios, así como la existencia de nuevos sectores afectados por el capitalismo neoliberal, replantean las alianzas sociales que definen el campo de *lo popular*.

Estudios insuficientes arrojan poca claridad en estas cuestiones, y bloques epistemológicos impiden encararlas. Parte importante de la izquierda latinoamericana ha sucumbido a la hegemonía ideológica del liberalismo conservador, que ha transformado sus concepciones sobre la sociedad, el Estado, la política y la democracia, afectando sus objetivos y sus prácticas políticas.

Debido a las limitaciones de espacio, a estas últimas cuestiones dedicaré el análisis de este trabajo: cómo la adopción de las concepciones y las prácticas políticas liberales ha facilitado la subordinación de la izquierda a las reglas del juego de la democracia gobernable, lo cual condiciona su capacidad política de representar los intereses de los sectores sociales que demandan la transformación de la realidad actual.

Para aportar a una discusión en este sentido, se hace una breve reflexión sobre el *parlamentarismo* como una práctica política de integración a los objetivos dominantes en el marco de la democracia liberal, las transformaciones que el sistema representativo ha tenido en los distintos contextos capitalistas, con funciones de *mediación* en los períodos de expansión, o de *control* social y político cuando los objetivos de acumulación capitalista son antagónicos a la incorporación de intereses subalternos en las políticas públicas, como ocurre hoy en el marco de la democracia gobernable. A continuación se analizan las condiciones políticas específicamente latinoamericanas que originan a la imposición de este modelo conservador de democracia, en el cual participan los partidos

de izquierda, los nuevos escenarios creados con el crecimiento electoral de estos partidos y los efectos contradictorios que les genera. Y se finaliza con una reflexión sobre algunas de las contradicciones contenidas en las críticas de izquierda a los partidos y la política.

### La política como parlamentarismo

El parlamentarismo alude a dos fenómenos en el modelo político liberal: a una forma de gobierno, y a una concepción y unas prácticas que acotan la política al ámbito institucional, según reglas que garantizan que la representación de intereses diversos mantienen la dominación capitalista.

En América Latina, un dato de la hegemonía liberal es el grado en que la mayor parte de los partidos que participan en el sistema representativo acepta las premisas en las cuales se fundamentan las concepciones parlamentaristas. Entre ellas pueden señalarse, por ejemplo:

a) La idea de que el Estado es una unidad homogénea, producto de un pacto social entre iguales (ante la ley y como propietarios libres en el mercado), cuando el Estado es la cristalización institucional de relaciones de dominación entre desiguales, y que sólo se aproxima a una representación más vasta de la diversidad social cuando los dominados logran imponer sus intereses en el ámbito público.

b) La idea de que sólo se realiza política a partir del parlamento, cuando en realidad *política* es toda forma de confrontación de fuerzas por ampliar el poder propio y disminuir el de los otros, lo cual ocurre en todos los ámbitos de la vida social.

c) La idea de que la política significa consenso, cuando en una sociedad de clases (y con el grado de desigualdad de fuerzas a favor del capital, como existe hoy en la región), el consenso sólo puede ser resultado de la subordinación voluntaria de los dominados.

d) La idea de que la única función de los partidos es la de ser el vehículo para la selección de las élites que establecerán el consenso en el ámbito institucional, en lugar de concebir a los partidos como instrumentos de gestación de fuerza política en todos los ámbitos de la vida social.

e) O la idea de que la democracia sólo tiene por finalidad la de formar gobiernos mediante el sistema representativo y la de administrar en el sistema político las relaciones de poder existentes sin modificarlas, en lugar de concebir la democracia como un proceso de ampliación de las capacidades de decisión de la mayor parte de la sociedad, lo cual implica como punto de partida y punto de llegada (en discurrir perpetuo) una mayor igualdad social.

Desde finales del siglo XIX estas concepciones contrapuestas marcan el debate político sobre las posibilidades que tienen los sectores explotados y dominados de incidir en las instituciones de un Estado que condensa

el poder de clase de la burguesía. Una perspectiva histórica a largo plazo señala límites indudables en ese sentido. Ricas experiencias indican que es posible que los sectores dominados puedan hacer valer su fuerza social y política, de manera independiente, para transformar las instituciones en instancias que les sean más favorables para avanzar en objetivos democratizadores, es decir, de mayor igualdad social. También existen experiencias históricas que indican que, en los límites, la burguesía suele destruir las instituciones de participación política legal de los dominados.

Los procesos políticos tienen una dialéctica que depende de las circunstancias y de la relación de fuerzas entre los actores. Sin embargo, la perspectiva histórica tiene importancia estratégica porque establece parámetros de previsión de posibilidades. O, al menos, permite objetivar las formas de dominio ideológico encubiertas tras el pragmatismo. Esa perspectiva histórica es la que puede contribuir a observar en el parlamentarismo algunas causas consistentes del desprestigio de la política.

### Parlamento sin democracia

El parlamentarismo surge a finales del siglo XVII en Inglaterra como un modelo de organización estatal basado en la división de poderes y en una creciente injerencia del parlamento sobre la función de gobierno, que le permite a la burguesía en ascenso limitar el poder absolutista y establecer formas de alianza y negociación con las fracciones propietarias aristocráticas que están en un franco proceso de aburguesamiento. Es un modelo de régimen estatal que permite la conciliación de intereses propietarios y la estabilidad política requerida para la expansión capitalista.

El parlamento funciona en principio sólo como un factor de contrapeso al poder monárquico en el ejecutivo y, en un proceso posterior, interviene de manera directa en la administración del gobierno mediante la elección del primer ministro. En esta forma de organización estatal los partidos tienen por única función la de ser el vehículo de acceso al manejo de la cosa pública (que tardará un siglo en ser en la forma de república) a partir del parlamento. Son partidos exclusivamente de propietarios, de los grupos dominantes, pues sólo éstos constituyen la sociedad política<sup>5</sup>.

Este modelo de Estado parlamentario *no democrático* es el Estado

---

5. Sólo en el interregno jacobino de la Revolución Francesa (1792-1795) la exclusión política de los sectores no propietarios (ciudadanos pasivos) impuesta por la democracia censitaria disminuye con la incorporación de los varones no propietarios mayores de 35 años. En Inglaterra, en 1832, se hace una primera reforma política, pero es sólo en la década de 1960 en que ésta significa realmente alguna apertura representativa. John Stuart Mill es uno de sus exponentes. Véase *Consideraciones sobre el gobierno representativo*, México: Guernika, 1991.

liberal que logra imponerse hasta finales del siglo XIX. La “república parlamentaria” francesa se instaure sobre la derrota y la masacre de los obreros que se levantaron en 1848 contra la monarquía de Luis Felipe. La II República se libera de todo vestigio real o simbólico de la “república social” y, en el parlamento, las fracciones burguesas comparten la administración política del Estado, dejando atrás sus diferencias doctrinarias: liberalismo y conservadurismo se fusionan en “el partido del orden”<sup>6</sup> de la burguesía expansiva. Ni el golpe de Luis Bonaparte elimina esa función del parlamento, que, desde entonces –al decir de Guizot–, se le identifica como “la democracia”<sup>7</sup>.

La idea de que el parlamento es el ámbito de la política por excelencia procede de la antigua idea liberal del Estado como contrato, desde Hobbes y Locke. Así, el Estado es el producto de un consenso social que se materializa en las leyes, que son el ámbito de la soberanía; en el parlamento, la sociedad política renueva y perfecciona el consenso. Puesto que se parte de la noción de que la sociedad está constituida por individuos iguales ante el Estado, el consenso presupone la homogeneidad de intereses, lo cual, en efecto, era empíricamente demostrable en un parlamento en el que sólo estaban los grupos dominantes.

En el siglo XIX la unidad abstracta del Estado (Hegel)<sup>8</sup>, que el parlamento representa, tiene como principio de homogeneidad a la nación, esa entidad que se construye desde entonces y da fundamento al Estado liberal. El sistema representativo es, por tanto, el que realiza políticamente a

6. Las ilusiones parlamentaristas de la pequeña burguesía socialdemócrata de la Montaña, que cede a la presión del *partido del orden* en cuanto a desmovilizar sus fuerzas y sus alianzas con los sectores populares, lo cual permite que aquél la desbanque, es lo que lleva a Marx a hablar de “cretinismo parlamentario”: “[...] aquella peculiar enfermedad que desde 1848 viene haciendo estragos en todo el continente, el *cretinismo parlamentario*, enfermedad que aprisiona como por encantamiento a los contagiados en un mundo imaginario, privándolos de todo sentido, de toda memoria, de toda comprensión del rudo mundo exterior [...]”. En “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, *Obras escogidas*, Moscú-México: Editorial Progreso-Eds. de Cultura Popular, s. f., p. 148.

7. Conservador antidemocrático militante, Guizot reconoce en el parlamento un instrumento útil para garantizar el “orden” y alejar el “caos” de los movimientos democratizadores populares. Véase *De la democracia en Francia* (1849), reproducido en *Lecturas básicas de historia y sociedad*, UAM-Xochimilco. Carl Schmitt lo señala como el principal defensor del parlamentarismo a mediados del siglo XIX. Lamentablemente, no localicé el texto de Guizot *Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe*, que cita Schmitt en *Sobre el parlamentarismo* (1926), Madrid: Tecnos, 1996, p. 43.

8. Cfr. Los comentarios de Regis de Castro Andrade, “Sociedad, política, sujeto: variaciones sobre un viejo tema”, en Norbert Lechner, *Qué significa hacer política*, Lima: Desco, 1982.

la nación<sup>9</sup>. La delimitación del Estado nacional coincide con la asignación de la ciudadanía política como un atributo de inclusión-exclusión de la nación frente a los otros Estados.

En cualquiera de esas fundamentaciones la sociedad civil (individuos aislados iguales ante la ley) se transforma en un ente público, político, sólo mediante el parlamento, el *locus* exclusivo de la política. Mediante el sistema representativo, los partidos son el vínculo entre esa sociedad (de intereses homogéneos) y el Estado (unidad suprema de esos intereses). He aquí el fundamento del *parlamentarismo* como *concepción de la política* (además, como forma de Estado). Del principio de homogeneidad se deduce el principio de la política como *intercambio de opiniones* solamente, nunca como conflicto de intereses. Despojada por la teoría liberal de cualquier connotación social, y establecida como materialización de la unidad nacional, la política es también transformada en una esfera autónoma que sólo existe en el Estado.

### Parlamentarismo como mediación

Desde las últimas décadas del siglo XIX y en particular a partir de 1918, cuando los enormes partidos obreros europeos conquistan el sufragio (masculino) universal, la democracia representativa se transforma en un fenómeno de masas y pluriclasista, introduciendo inéditos desafíos a la dominación burguesa: la necesidad de *mediaciones*.

A la burguesía le obliga a aceptar en el ámbito público algunos intereses de los dominados, lo cual multiplica la potencialidad política de estos sectores. Pero, al mismo tiempo, la burguesía logra someter a los partidos obreros a los valores y las reglas del sistema político, y consume su integración al mismo. Con ello se liquida su peligrosidad anticapitalista.

Las formas de mediación son siempre instrumentos para reproducir la dominación, legitimándola ante fuerzas contrarias importantes. Pero, al mismo tiempo, esos espacios de mediación posibilitan la participación de los dominados. Si ésta es independiente política e ideológicamente, la democratización que resulta de la mediación forma parte del desarrollo autónomo de los dominados, hasta generar contradicciones insalvables para la dominación. Pero si se hace de manera subordinada, a pesar de las conquistas económicas o sociales que se obtengan, la dominación se refuerza. Éste es el complejo campo de contradicciones y posibilidades políticas que hace a la democracia liberal, y que pone desafíos ineludibles a los sectores dominados.

Tras su ruptura con los marxistas, y al calor de las reformas sociales que conquistan en el parlamento, los partidos de la II Internacional se

---

9. Véase John Stuart Mill, *op. cit.*

asimilan a la lógica del parlamentarismo. Parten de la premisa de que el crecimiento económico y la disposición del capitalismo para distribuir parte de los excedentes (los dos fundamentos del consenso parlamentario), son la naturaleza misma del sistema<sup>10</sup>. En aquel entonces la expansión económica lo permitía, aunque 50 años más tarde se comprobaría que la distribución del ingreso no es consustancial al capitalismo. Las reformas sociales, como mecanismo de mediación, permiten al Estado recomponer su unidad con la inclusión de esos intereses subordinados y al convertirlos en derechos (universales por definición), con lo cual el parlamento se consagra como el símbolo del interés nacional. Y nacionalistas se hacen los partidos obreros. Son estas regresiones políticas las que cuestiona Rosa Luxemburgo, y no un rechazo genérico a toda reforma<sup>11</sup>.

Al calor de las reformas y de los evidentes crecimientos electorales de los partidos socialdemócratas aparece un fenómeno realmente nuevo: la competencia por los electores. Ésta provoca cambios en todos los partidos, tanto en sus plataformas políticas como en sus estructuras organizativas, acompañados de una burocratización progresiva (aunque sin afectar aún la función mediadora de los partidos). A partir de la agregación de intereses sociales diversos, los partidos burgueses se hacen nacionales; de modo concomitante crean estructuras organizativas permanentes para enfrentar a las poderosas organizaciones obreras. Así mismo, éstas les disputan a la clase media y a la pequeña burguesía, para lo cual tienden a diluir el carácter clasista inicial de sus programas.

Estas grandes estructuras exigen la profesionalización de los políticos y la búsqueda de financiamiento por el Estado. Tras esta “conquista”, todos se transforman en partidos estatales, que forman parte del presupuesto público; y con ello crece la pérdida de independencia de los partidos obreros.

Mientras éstos conservan su implantación clasista en los sindicatos, la burocratización del partido no se traduce aún en un desprendimiento elitista de sus representantes. Max Weber, quien reconoce en el parlamentarismo un instrumento útil para la integración política a los objetivos capitalistas, lamenta el peso de clase que aún tiene el accionar parlamentario del partido obrero alemán, puesto que todavía son las “maquinarias partidarias” las que determinan los candidatos y sus programas. Su intención política no puede ocultarse, ni siquiera con el argumento aristocratizante

---

10. Véase de Eduard Bernstein, *Socialismo evolucionista. Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia*. S. l.: Fontamara, 1972.

11. Rosa Luxemburgo, *Reforma o revolución* (1899). México: Grijalbo-Colección 70, 1967. La dicotomía entre reforma y revolución que años después caracteriza algunas posturas de izquierda, es producto de una vulgarización descontextuada de aquella discusión.



que da en el sentido de que, con esos “simples” obreros, el parlamento dejó de ser la *galería de talentos* que una vez fue como fiel representante del *orgullo del ser alemán*. En 1918 Weber ya se ha declarado liberal<sup>12</sup>.

En realidad, es Robert Michels<sup>13</sup> quien deduce la burocratización y la elitización de los partidos obreros del parlamentarismo en sí, y no como un simple reflejo de la burocratización del Estado, como plantea Weber. La formulación de su famosa *ley de hierro* de la oligarquización inevitable de las organizaciones se encuadra en ese contexto de la política parlamentaria<sup>14</sup>. A la cual ve con ojos críticos por la desnaturalización que produce en el Partido Obrero alemán, al que todavía pertenece. Y en buena medida, esto explica que su rechazo a la política liberal le conduzca a simpatizar después con el corporativismo político. Para Michels la elitización proviene precisamente de la dinámicas de consenso en el parlamento, que produce la autonomización de los representantes obreros respecto de las decisiones políticas del partido, y que incluso hace que la bancada parlamentaria sea la que busque imponerle la línea política, de acuerdo con los requerimientos del consenso.

La absolutización de esta *ley* (toda organización conduce inevitablemente al elitismo) es parte del arsenal ideológico liberal para negar la compatibilidad de la participación en el parlamento con la persistencia de un perfil clasista independiente del partido de izquierda, lo cual conduce, por extensión, a crear escepticismo respecto a la organización misma. Por supuesto que se obvian las críticas que ya Gramsci realizaba al respecto<sup>15</sup>.

### Parlamentarismo como control

Tres décadas después el tema de las élites es retomado por los ideólogos liberales conservadores, quienes hacen la apología del elitismo en tanto instrumento de estabilización política del sistema.

Joseph Schumpeter<sup>16</sup> destaca la utilidad que ha tenido el parlamenta-

12. Max Weber, “Parlamento y gobierno en una Alemania reorganizada. Una crítica política de la burocracia y los partidos” (1918), en *Escritos políticos*, Madrid: Alianza, 1991.

13. Robert Michels, *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna* (1915), dos tomos, Buenos Aires: Amorrortu, 1969.

14. La elitización de los sindicatos también es producto de los consensos entre capital y trabajo con que se fundamentan los consensos políticos.

15. Antonio Gramsci es enfático en diferenciar centralismo democrático de centralismo burocrático en función de querer cambiar la realidad o mantener la dominación. Véase “El partido político”, en *Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno*, México: Juan Pablos, 1975.

16. Joseph Schumpeter, *Capitalismo, socialismo y democracia* (1942 y 1946), dos tomos, Madrid: Orbis, 1983.

rismo como mecanismo integrador de los partidos socialistas al sistema. Sin embargo, considera que debe replantearse la democracia representativa: la influencia de la política sobre la economía será insostenible cuando el capitalismo entre en una fase de crisis. (Significativamente, él la prevé en el momento de la gran expansión). Señala que el peligro no se encuentra sólo en la incidencia obrera en los procesos productivos y distributivos, sino que, peor aún, los funcionarios de la burguesía han hecho suyos valores proclives a la igualdad social.

Para vacunar al capitalismo de intervenciones que alteren el proceso de acumulación —en particular en momentos de contracción— la democracia debe despojarse de su *función social* y limitarse a ser un método de formación de gobiernos, y los partidos a ser los proveedores de las élites para el consenso. El consenso es producto de un acuerdo estructural básico. Al existir dicha coincidencia en los objetivos económicos, éstos pueden despejarse del ámbito político para situarse en el único ámbito que debe decidir sobre lo económico: el mercado. Si el parlamento, como eje del sistema político, funciona como instancia de consenso, las únicas diferencias serán de tipo procedimental, como también lo plantea un liberal conservador como Giovanni Sartori<sup>17</sup>. Con partidos que guardan poca o ninguna diferencia programática fundamental, la elección de las élites se realiza mediante una oferta política que atrapará a los consumidores (votantes), atrayéndolos por las técnicas de mercadeo (*marketing*). Como la “sustancia” (ideológica y programática) de la mercancía de los oferentes es realmente la misma, debido al consenso estructural básico, la diferencia estará en la imagen del producto que se venda.

Tras el estallido de la crisis capitalista de fines de la década de 1960, y la imposición del modelo neoliberal para contrarrestarla, los ideólogos capitalistas (por ejemplo, la Comisión Trilateral)<sup>18</sup> retoman el modelo de la democracia de élites como la solución política para la crisis de gobernabilidad en los países centrales, a la cual caracterizan como de “exceso de demandas”; para ello es necesario debilitar a la clase media y a las organizaciones sindicales. Y para una América Latina surcada por movimientos rupturistas de claro contenido anticapitalista, recomiendan los golpes de Estado como medida quirúrgica inmediata para eliminar cualquier resistencia al capital. Una vez consumada, el modelo democrático

---

17. Giovanni Sartori, *Teoría de la democracia* (1987), dos tomos, México: Alianza-Patria, 1991.

18. Comisión Trilateral, “La gobernabilidad de la democracia”, en *Cuadernos Semestrales*, n° 2-3, México, Cide, 1977-1978.



por implantar<sup>19</sup> será el que acabamos de describir, cuya finalidad será garantizar una dominación políticamente estable (governabilidad), que las dictaduras ya eran incapaces de lograr.

Sólo que habrá un “detalle”, y es que en las condiciones de América Latina, de enorme desigualdad y pobreza, ese consenso estructural básico no existe como fundamento de las expectativas democráticas de los sectores populares. Y cabe anotar que el propio Schumpeter señalaba que “(este) método democrático no funciona nunca del modo más favorable cuando las naciones están muy divididas por los problemas fundamentales de estructura social”<sup>20</sup>.

Por tanto, la democracia liberal, como método de gobernabilidad, tiene que resolver varios obstáculos:

1) Construir los consensos entre las élites, para lo cual necesita desarrollar políticas de integración sistémica de la izquierda antineoliberal, además de transformar sus liderazgos en un sentido elitista (el parlamentarismo será un método útil).

2) Lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda políticas. Como esta última está definida para amplios sectores, por aspiraciones de mayor igualdad social, y contraría los objetivos de acumulación capitalista (que son los que determinan el tipo de ofertas en cuanto a políticas públicas), el equilibrio debe resolverse con una contracción de las demandas, objetivo nada sencillo en sociedades en las que la mayoría de la población está al borde de la sobrevivencia. Para lograrlo, la estrategia se dirige simultáneamente a:

a) destruir a los sujetos demandantes en tanto tales, mediante su dispersión económica y social y su subordinación ideológica;

b) al sistema de partidos le corresponde ejercer la función de control social y política sobre los sujetos demandantes, tanto para que disminuyan sus volúmenes de reclamo como para evitar que estallen conflictos.

Se trata de una función que modifica sustancialmente el papel de la representación. He aquí pistas para explicar el distanciamiento entre algunos partidos de izquierda latinoamericanos y los sectores sociales que declaran representar.

### **La instauración de regímenes liberales en América Latina**

En la década de 1990 el escenario liberal representativo en la región se completa sin excepción, tanto para los países que salen de dictaduras o guerras civiles, como los que transforman sus sistemas políticos en sentido liberal dentro del mismo régimen, como México.

19. La caída de las dictaduras se acelera por las resistencias populares, pero el modelo de restauración del régimen representativo lo impone la derecha neoliberal.

20. Joseph Schumpeter, *op. cit.*, p. 378.

Las “transiciones hacia la democracia” construyen el entramado institucional y político de los *shocks* neoliberales, los llamados “reajustes estructurales”, que llevan a cabo los gobiernos *democráticos* desde el inicio de esa década, mucho más profundos que los de las dictaduras.

Las transiciones operan con diferentes intenciones clasistas entre los actores contrarios a la dictadura. Todos coinciden en la conveniencia de reconstruir las instituciones representativas y los espacios de negociación política, y la instauración de las libertades liberales básicas eliminadas mediante el terror de Estado. Algunas fracciones burguesas se pliegan al rechazo a la dictadura porque quedaron fuera de los ámbitos de decisión, y la democracia la quieren para reconquistarlos en función de dar seguridad a sus intereses en el futuro. En la perspectiva de los asalariados, el autoritarismo ha sido causa principal de su empobrecimiento, y quieren erradicar a uno con otro. De hecho, fueron sus luchas las que aceleraron la transición; para los grupos de poder había quedado claro que las dictaduras ya eran inútiles para mantener a raya a los asalariados, ello debía lograrse con la legitimidad de un nuevo régimen.

La reconstrucción institucional, como núcleo de las concertaciones, dio cabida a la sobrerrepresentación de las posturas liberales sobre la *deseabilidad negociadora* como un fenómeno autónomo de las determinaciones sociales y económicas. El hecho de que, con la excepción de Nicaragua, en toda América Latina se lograra el cambio de régimen por negociaciones civiles-militares, parecía abonar la justeza y el realismo de esas concepciones.

Un poder militar que no había sido derrotado, también reforzó la idea de preservar los avances institucionales –que se observaban frágiles ante la actividad incesante de los militares– y de subsumir las demandas que pudieran causar irritación. Se llamaba al “realismo” de los actores populares para lograr una *“construcción ordenada de la democracia política”*, en palabras de Francisco Delich:

Es en esta especial situación en la que pienso, el encuentro en un terreno común, coexistiendo la dictadura y la democracia, y sus respectivos actores, para separarse *luego* radicalmente, pero dejando huellas profundas en el estilo y en la práctica política [...]. La construcción del poder democrático implica la recuperación de las formas democráticas: ambos suponen el ejercicio de la democracia en el interior de los propios actores políticos, sin ninguna duda, pero, sobre todo, la consolidación de un espacio político definido por reglas aceptadas por todos los participantes y cuya legitimidad arranca desde su punto más ilegítimo, aquél del espacio común con la dictadura. [...] El espacio definido en el encuentro entre esta dictadura y la política define también los actores políticos, y lo

son aquellos –únicamente aquellos– que quieren o pueden situarse en el interior de este espacio<sup>21</sup>.

El “luego” suponía que habrían dos transiciones sucesivas, una consolidando las instituciones, y otra en la que los actores harían prevalecer “su estilo”, ¿acaso sus intereses? O sus subjetivas formas de entender la democracia, “tan válidas unas como otras”, en un mundo que es sólo “representación”, “símbolos”<sup>22</sup>. La teoría del todo se vale.

En todo caso, las reglas del juego de ese “espacio común” terminaron por ponerlas los militares, los empresarios y sus partidos, que nunca dejaron “de hacer política” aun por fuera de las instituciones estatales. Norbert Lechner suponía que, en democracia, el dominio directo del capital sobre la política cambiaría al “repolitizarse la política”, lo cual no fue así, como es evidente<sup>23</sup>. Pero había que esperar sin despertar al monstruo.

Guillermo O'Donnell y Phillippe C. Schmitter sostenían que era decisivo que:

Se alcance, de algún modo, una transacción entre los intereses de clase, a fin de reasegurar a la burguesía que sus derechos de propiedad no correrán peligro en un futuro inmediato, y a los trabajadores y otros grupos de asalariados, que a la larga se satisfarán sus demandas de mejores remuneraciones y de justicia social [para lo cual]. A la izquierda se le requiere no hacer un uso pleno de ventaja simbólica inmediata y sacrificar, o al menos posponer por un período indefinido, su objetivo de una transformación que lleve a una “democracia avanzada”<sup>24</sup>.

La *segunda* transición nunca llegó, pues en esa *primera* se establecieron los términos del consenso a favor de dar confiabilidad al capital hasta que todo estuviera calmado. La derecha se ocupó de demostrar que no había llegado el momento para exigencias. Cualquier demanda social, salarial o laboral se consideró un “bloqueo” al sistema. Cualquier demanda de juicio a los violadores de derechos humanos se desterró con todo tipo de chantajes autoritarios y desafueros de parlamentarios de izquierda, que al

---

21. Francisco Delich, “Teoría y práctica política en situaciones de dictadura”, en Norbert Lechner (Ed.), *Qué significa hacer política*, Lima: Desco, 1982, pp. 146-147. (El resaltado es mío).

22. Javier Bonilla, “De marxismos y democracia”, en *Capítulo Sociológico*, n° 2, *Semanario Jaque*, 31 de mayo, Montevideo: 1985, pp. 1-3.

23. Norbert Lechner, *op. cit.*, p. 22.

24. Guillermo O'Donnell y Phillippe C. Schmitter. *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, vol. 4 (1986), Buenos Aires: Paidós, 1991, pp. 77-78. Citado en otros textos de mi autoría.

exigirlo “atentaban” contra la “estabilidad democrática”. Todavía Pinochet disfruta de esos principios fundantes de la democracia representativa en Chile, al igual que el resto de sus colegas de armas en los demás países, que ahora rehacen sus estrategias de “seguridad” con funciones policiales y en los cánones del terrorismo al estilo de George Bush.

Preservado el deseado orden, los gobiernos *democráticos* tuvieron escenarios de impunidad para profundizar la restructuración capitalista neoliberal. Al desempleo y los bajos salarios se le reasignan funciones para quebrar los mecanismos organizativos y legales de defensa de los trabajadores (la llamada flexibilización laboral). Se manipula el subempleo en un sector “informal” escasamente demandante y muy despolitizado. Se traduce la miseria en inseguridad, y ésta en una población proclive a un Estado cada vez más represivo. Una mezcla de decepción política con fatalismo social arroja a amplios sectores de la población latinoamericana a los brazos del individualismo, el conformismo y la pasividad. Los sectores dominantes llevan a cabo una poderosa ofensiva ideológica y de chantaje económico para concretar la conversión de los intelectuales al fundamentalismo liberal. Sólo así la doctrina encaja con la realidad... *realismo puro*. La *segunda* transición se aleja cada vez más, la *primera* fue exitosa en cuanto a los requerimientos por la dominación capitalista.

### La política de izquierda en los marcos de la gobernabilidad conservadora

Se puede coincidir en que esta democracia no es peor que las dictaduras, bastó vivirlas para conocer la diferencia. Pero ésta es una valoración con distintas entonaciones clasistas, porque es difícil convencer a los numerosísimos sectores que se encuentran en los límites de la sobrevivencia de que ahora están mejor. No lo creen así los indígenas, los campesinos expropiados, los niños y las niñas que mueren por enfermedades curables, estén en *situación de calle* o en el seno de sus familias, los jóvenes desempleados que son perseguidos con la presunción de su culpabilidad intrínseca, o los trabajadores baleados y encarcelados en las protestas. Tampoco da su aval a esta democracia algo más del 50% de los electores que no acuden a las urnas (en el promedio latinoamericano), más los que se suman sin siquiera haberse registrado como electores<sup>25</sup>.

25. El abstencionismo es más que un simple indicador de apatía, es también de rechazo: para las elecciones parlamentarias en Chile del 14 de diciembre de 2001, 2,19 millones de jóvenes no se inscribieron en el registro electoral; algo más de un millón de votantes se abstuvo y casi 900 mil anulaban su voto o lo depositaron en blanco; en total, casi un 45% de los ciudadanos mayores de 18 años. (Datos en Gustavo González, “La derecha se acerca, la transición se aleja” en *Brecha*, 21 de diciembre, Montevideo: 2001, p. 41). Aunque si el rechazo no se expresa como rechazo activo, puede ser funcional a los objetivos de la

Sin embargo, estamos ante aperturas políticas indudables, que han convertido a los *enemigos* anteriores en los *adversarios* actuales. Razón suficiente para entender que numerosos sectores partidarios de izquierda, que fueron los objetivos principales del terror de Estado, aceptaran inicialmente las nuevas reglas del juego político. Pero no trataron o no pudieron modificarlas, y, peor aún, convirtieron la adaptación en teoría, en justificación de sus conversiones ideológicas.

Las expectativas de Delich, señaladas antes, no se cumplieron: para ser tratados como pares, muchos representantes de izquierda se sometieron a las exigencias de la derecha en cuanto a desprenderse de sus compromisos sociales y adoptar las “prácticas políticas” y los “estilos” exigidos para integrarse al círculo de los que negocian. Pero esto va más allá de carreras desenfundadas por cargos y prebendas, generosamente ofrecidas para lograr su cooptación, que es el aspecto visible de la crítica que hoy se hace a los partidos; aun para las excepciones en cuanto a prebendas, existe también la aceptación del papel por cumplir en el sistema político.

Se ha aceptado (por convicción o resignación) que la política no puede incidir sobre la economía. Ya sea porque muchas de las decisiones económicas se han concentrado en el poder ejecutivo, como por subordinación a la estrategia de la *profecía autocumplida de la globalización*: no se pueden contrariar las leyes del mercado, se renuncia a tomar decisiones<sup>26</sup>, *ergo*, los embates del capital transnacional de origen fóraño o criollo se multiplican sin poder frenarlos.

El consenso al que se convoca a la izquierda se dirige exclusivamente a respetar los intereses del capital, “en aras de empleo y salarios”. Sólo que hasta ahora nadie ha podido demostrar que ésa sea la intención del gran capital especulativo y sobreexplotador.

Algunos partidos de izquierda dedican buena parte de sus esfuerzos para negociar con la derecha “políticas de Estado”, subsumiendo para ello las movilizaciones propias.

La negociación, en efecto, es parte de las relaciones políticas entre fuerzas comparables. Otro es el objeto de mi crítica: que no se entienda que mientras continúen las correlaciones de fuerza sociales que se expresan y cristalizan en las instituciones, sólo el gran capital es el que define

---

governabilidad: Abel Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana, presidente electo en la segunda vuelta en Costa Rica, en abril de 2002, lo expresó con claridad: “El elevado abstencionismo se dio porque los costarricenses confían en el sistema democrático. Creo que ese 40% de abstencionismo significa que vivimos en la democracia”, *La Jornada*, 8 de abril de 2002, México, p. 29.

26. La única excepción registrada es el referendo ganado contra parte importante del articulado de la ley de privatización de empresas públicas en Uruguay, 1992, que ha permitido conservarlas, invertir en ellas y hacerlas muy eficaces.

las políticas de Estado: sean los rescates bancarios por crisis de origen fraudulento, las políticas fiscales regresivas, o la política exterior, en los que Estado y gobierno quedan fusionados en el interés neoliberal. Pretender negociar sin fuerza es tanto como hacer legítima la subordinación. Los partidos representan más que diferencias de votos: los que representan el interés capitalista tienen detrás toda la estructura de poder (empresarios, fuerzas armadas y policiales, burocracias estatales y partidarias, medios de comunicación, cúpulas de la iglesia y narcotráfico), mientras que la izquierda debe construir permanentemente su fuerza social, y ello se hace movilizándola para negociar.

Ha calado hondo en varios partidos de izquierda que los conflictos sociales son dañinos para la democracia, y de este modo se sitúan en las lógicas conservadoras de la gobernabilidad. Numerosos ejemplos de iniciativas de lucha de organizaciones sindicales o estudiantiles se consideran “inconvenientes” porque cierran la posibilidad de “diálogo” con la derecha<sup>27</sup>. Y en verdad ésta actúa con rigor para demostrar que negocia sólo con los parlamentarios que están dispuestos a disociar esa función con la de organizadores sociales: valga el ejemplo más reciente de la expulsión de Evo Morales del parlamento boliviano<sup>28</sup>.

Durante algunos años los partidos de izquierda parlamentaria lograron incidir en la reducción de movimientos “disruptivos” a la estabilidad política. Hoy en día han sido rebasados<sup>29</sup>, y por eso están dejando de ser considerados útiles para la gobernabilidad, son cada vez más aislados en la negociación parlamentaria, o incluso son objeto de ataques en los que dejan de ser adversarios para volver a convertirse en enemigos.

### Contradicciones en los escenarios de gobernabilidad

La realidad latinoamericana es tan lacerante que a pesar de los esfuerzos dominantes y de las subordinaciones ideológicas y políticas de algunos partidos de izquierda, es casi imposible impedir que las

27. Una experiencia en ese sentido fue la huelga estudiantil en la Unam en 1999. Es incierto que la conjunción de esfuerzos hubiera garantizado una victoria, pero sí hubiera disminuido las posibilidades de derrota.

28. El dirigente aymara fue expulsado del Congreso boliviano el 24 de enero de 2002 por encabezar el movimiento de cocaleros en el Chapare.

29. La marcha convocada por la central obrera en Uruguay hacia Punta del Este para reclamar contra la política económica, a fines de enero de 2002, fue cuestionada inicialmente por sectores del Frente Amplio. A pesar de las amenazas del gobierno, la movilización preparatoria de las bases sindicales, frenteamplistas y otros sectores terminó por decidir la adhesión: fueron 15 kilómetros de automóviles, camiones de redilas y autobuses llenos de gente. Véase información en semanario *Brecha*, n° 843, 25 de enero de 2002, Montevideo, Uruguay.



demandas populares se expresen de alguna manera. Con el voto a la izquierda, nuevos sectores populares buscaron salidas a su pauperización por un camino distinto del de la lucha frontal con el capital, pues ésta ha sido infructuosa ante la inflexibilidad capitalista. En la década de 1990 la izquierda ganó gobiernos municipales o estatales y, en general, amplió sus representaciones parlamentarias<sup>30</sup>.

Con ello se abrió una dialéctica compleja entre rechazo y legitimación de lo electoral como eje de la acción política, que a veces fue interpretada en forma incorrecta. Primero, debe reconocerse que los triunfos electorales no suponen una validación social de las prácticas parlamentaristas; muy por el contrario, manifiestan adhesión a un accionar político no acotado por las lógicas sistémicas. En buena parte del voto a la izquierda hay expectativas claramente clasistas<sup>31</sup>. Segundo, existen avances electorales que derivan de firmes arraigos sociales de varios partidos, procesos anteriores de acumulación de fuerza social y política que se condensan como fuerza electoral. Tales son los casos del Partido dos Trabalhadores en Brasil (1989), el Frente Amplio en Uruguay (1989) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador (1996). Aun sin contar con arraigos sociales equivalentes a los anteriores, los triunfos electorales del Partido de la Revolución Democrática en México (1997) y el de Causa R en Venezuela (1990) son también reconocimientos a la participación de esos partidos en las luchas sociales. Tercero, los crecimientos electorales que se verificaron en elecciones posteriores en todos esos países, fueron motivados por un grado elevado de aprobación a las gestiones de gobierno y no por éxitos de *marketing*. A pesar de las guerras declaradas por los partidos de la derecha, de los bloqueos presupuestales desde los gobiernos centrales e incluso de dificultades originadas en la inexperiencia, en general la izquierda demostró saber gobernar con un sentido democrático y con vocación de servicio. En algunos casos, avanzó en la gestación de ciudadanías gobernantes<sup>32</sup>, con formas originales de participación, que dieron

30. El análisis de estas experiencias está en el libro que coordino y del que soy coautora: *Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio*. México: UAM-Xochimilco y Plaza y Valdés, 1999.

31. Algunas frustraciones en las expectativas de naturaleza clasista provienen de la dificultad para distinguir esferas de competencia entre los ámbitos de gobierno, puesto que se les reclama a los locales cambios que radican en las instancias gubernamentales centrales.

32. La más relevante y más exitosa es la experiencia brasileña del Presupuesto Participativo en Porto Alegre, que hoy se extiende a todo el Estado de Rio Grande do Sul, en el que también el PT ganó las elecciones.

fuertes bases de apoyo a los gobiernos, mucho más que a los partidos como tales.

En cualquier caso, se observa cómo a partir de estas experiencias, en los partidos conviven al menos dos lógicas políticas completamente distintas e incluso antagónicas: formas de hacer política apegadas a la población, en el caso de los gobiernos, y otras más comprometidas con las lógicas parlamentaristas<sup>33</sup>.

La potencialidad renovadora de las experiencias de gobierno sobre el partido no parece haberse concretado. Persiste un divorcio que, en parte, se debe a la autonomización que reclaman los equipos de gobierno. Pero las concepciones partidarias electoralistas conservan fuerza porque los gobiernos enfrentan un dilema: para que sus proyectos puedan madurar a largo plazo dependen de que se siga ganando elecciones. Es decir, dependen de las estructuras y las prácticas partidarias que han sido más descalificadas socialmente. Incluso es posible que los techos electorales que empiezan a mostrar estos partidos que gobiernan se deban al electoralismo que se impone como salida al dilema.

Los análisis realizados por los partidos no dan indicios de que circunstancias políticas tan ricas hayan introducido desafíos a sus concepciones. Algunos siguen obsesionados con las técnicas de *marketing* político, para lo cual hipotecan recursos económicos y humanos importantes que siempre serán desventajosos en la competencia con los partidos de derecha, además de los efectos negativos que tienen esas lógicas mediáticas sobre la política<sup>34</sup>. Al tiempo que desechan experiencias de vínculos de masas que han mostrado su eficacia, además de la función organizativa que poseen<sup>35</sup>.

Estas aspiraciones “modernizadoras” generan un círculo perverso de mayor dependencia financiera con el Estado y con las negociaciones elitistas en las que se determina. Las legislaciones electorales, en las cuales se obtienen algunos avances en cuanto a equidad formal, resultan muy onerosas desde el punto de vista político pues son francamente intervencionistas (en la elección de autoridades y candidatos, en criterios organizativos, en los manejos financieros y administrativos, etc.). Los

33. En el PT, el FA y el FMLN convive también la presencia partidaria en organizaciones sindicales y universitarias, haciendo más compleja la identidad del partido. Estos arraigos de masas son antídotos a las tendencias liberales, aunque no siempre logren imponerse como línea general del partido.

34. Véase Ricardo Yocolevzky, “Lumpendemocracia en América Latina”, en *Política y Cultura*, n° 17, México: UAM Xochimilco, 2002.

35. No se contemplan experiencias tan reveladoras como la marcha zapatista de marzo de 2001, en la cual la masividad del movimiento que la rodea logra imponerse al bloqueo de los medios de comunicación. El contragolpe popular en Venezuela, de mediados de abril de 2002, también ofrece elementos de reflexión importantes en ese sentido.



ingentes esfuerzos que hoy se invierten desde la izquierda por ampliar su condición de partidos estatales muestran, además, que no se comprende que tales equidades son desiguales, pues la derecha cuenta con los recursos estatales y tiene entre sus medios de propaganda a funcionarios de gobierno, empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos, aunque lo hagan sin logotipo. Más aún, estos mismos activistas informales, más que de los partidos que defienden el orden social actual, manipulan los rechazos que el parlamentarismo cosecha entre amplios sectores, e incluso encabezan campañas para reducir los gastos estatales en el sistema representativo, que sobre todo afectarían a la izquierda. El círculo perverso de la dependencia política se cierra sobre la izquierda parlamentaria.

Éstas son debilidades que provienen de concepciones que son antagónicas a los objetivos buscados pero, contra toda simplificación, también existen debilidades originadas en las confrontaciones políticas mismas, donde nunca se actúa solo.

### **Crisis de representación: un origen, dos direcciones**

El cambio de función del parlamento, de mediador a instrumento de control, es un factor importante en la crisis de representación que hoy acusan todos los partidos. Debe decirse que la representación de intereses va más allá de los votos que conquisten los partidos, refiere la adhesión a las propuestas sociales y políticas con las cuales se sienten identificadas ciertas franjas de la sociedad. En el caso de la izquierda, existe una larga historia de representación de los intereses populares muy superior a lo movilizado como electorado, e incluso independiente de que el partido participara en la disputa electoral, que no siempre ocurría.

La crisis actual ocurre en dos direcciones: los partidos que representan el interés burgués han dejado de ser nacionales porque ya no agregan intereses sociales diferentes de los del capital; en tanto que los partidos que tienen por objetivo la representación de los explotados y los dominados (que es la mayoría de la población), han diluido esas definiciones clasistas en el intento de ser aceptados por fracciones dominantes, en la perspectiva hipotética de llegar a ser gobiernos nacionales. Aunque ambas están englobadas en una crisis de representación, se les debe tratar de manera diferenciada, como debiera ocurrir.

En el caso de los partidos burgueses, es necesario distinguir entre los que siempre representaron a los grupos oligárquicos y que por ello se les identificaba como la *derecha*, de los que fueron de tipo populista —por el contenido de las alianzas sociales que representaron aunque no todos funcionaron de manera corporativa— y que en otras épocas ocupaban el *centro* del espectro político.

En el campo burgués, son estos últimos los que acusan los mayores

cambios. Pensemos en el Partido Justicialista argentino, en la Democracia Cristiana chilena, en Acción Democrática en Venezuela, en el Partido Colorado en Uruguay, en el Movimiento Nacional Revolucionario boliviano, en el Partido Revolucionario Institucional en México. O en el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) de Perú, aunque su tradición gobernante es más breve.

Fueron partidos con influencia en las organizaciones obreras, universitarias y en el sector rural, que a pesar de sus prácticas políticas clientelistas y elitistas, lograron representar esos intereses al amparo de las políticas desarrollistas del Estado. Su crisis de representatividad no se explica, como pretenden algunos autores, por la “pérdida de centralidad del Estado”<sup>36</sup>, sino en el cambio de los contenidos de la intervención estatal, que sigue siendo central en la economía y en la política, como acabamos de comentar: no ha desaparecido la presencia pública, sino que es el interés del gran capital el que determina los contenidos del *interés general*, del *pacto social*.

Como es obvio, estos partidos conservan grados de representatividad entre sectores sociales no dominantes. Tienen todavía influencia sobre sectores muy pobres y marginados, a los cuales involucran con las políticas focalizadas estatales y con la intermediación de organizaciones no gubernamentales. También han logrado la adhesión social de fracciones de clase media profesionales que se reciclaron con la terciarización inducida por la economía neoliberal, como satélites de los procesos de acumulación por medio de actividades de servicios en empresas pequeñas, sectores dependientes de los éxitos del modelo, con posturas políticas muy conservadoras. En cambio, es patente el alejamiento de franjas de pequeños empresarios urbanos y rurales, a quienes el modelo está destruyendo.

Estos cambios en la composición social (y la magnitud) de los adherentes al proyecto político de estos partidos tradicionales no significa que éstos hayan dejado de ser estatales ni que hayan dejado de actuar al margen del aparato estatal al mismo tiempo. Más aún, son las fuerzas que ellos representan las que han modificado los contenidos sociales de la acción estatal. Entre democracia y dictadura, en este plano no hay cambios: aunque compartieron con los militares la administración del Estado, o se la cedieron momentáneamente, impusieron sus intereses al Estado como propietarios del capital.

El abandono de discursos más incluyentes o de representación de intereses diversos en los partidos tradicionales, no es un problema de “defección moral” de sus dirigentes, es el capitalismo al que representan

36. Norbert Lechner, “Por qué la política ya no es lo que fue”, en Revista Nexos, n° 216, diciembre, México, 1995.

el que ha cambiado y que se reproduce exacerbando la explotación y la exclusión. Que emigraran del “centro” a la derecha más franca no es algo circunstancial<sup>37</sup>, y por ello son nulas las posibilidades de que estos partidos se reformen o que sean actores de procesos verdaderamente democráticos en América Latina.

Por eso el contraste es mayor, cuando en lugar de privilegiar la representación de esas bases electorales populares alejadas de los partidos tradicionales, sectores importantes de la izquierda mantienen sus esfuerzos por ser partidos más estatales y actores cuasi indiferenciados del *pacto social*. Ese desperfilamiento clasista va de la mano de sus intenciones de convertirse en partidos “de ciudadanos”, de electores. La territorialización de sus estructuras partidarias adosadas a los circuitos electorales; la desorganización y la desmovilización de sus bases militantes para activarlas sólo en las campañas electorales; las políticas de afiliación asociadas a las elecciones partidarias; la preferencia por las encuestas de opinión y la publicidad televisiva –en lugar de debate político en la base– son datos de la impronta liberal de sus concepciones políticas.

Esa concepción de territorialización es de naturaleza distinta de la impulsada en el marco de la descentralización llevada a cabo por los gobiernos de izquierda para elevar la participación en el ámbito local, concebida como espacios de organización colectiva. Incluso muchas de estas iniciativas languidecen cuando reproducen la lógica “ciudadana” individualista, con apelaciones intermitentes para elecciones locales. Y se observan análisis de izquierda que sobredimensionan lo local frente a lo sectorial, a veces en términos excluyentes<sup>38</sup>, a partir de supuestos teóricos y sociológicos a veces inverificables<sup>39</sup>. Algunos de estos supuestos muestran la aceptación tácita de las teorías pluralistas liberales como descripción de las nuevas configuraciones sociales, y, en general,

37. Lo mismo vale para el laborismo inglés y el fanatismo reaccionario de Antony Blair.

38. Una perspectiva diferente, y tal vez por ello exitosa en cuanto a avances políticos, es el Presupuesto Participativo en Rio Grande do Sul, que combina la participación territorial con la sectorial (“asambleas temáticas”), donde lo estrictamente local (como servicios urbanos) se redimensiona con las perspectivas y las demandas nacionales de grupos sociales que participan en cuanto tales.

39. Por ejemplo, suponer que el desempleo implanta a esos trabajadores en el barrio, cuando éste a veces sólo es “dormitorio” de quienes están todo el día buscando cómo resolver la sobrevivencia. (Testimonios de integrantes de las Brigadas del Sol, del PRD en México, señalan la imposibilidad de encontrar a la gente en su casa). O la suposición de que la pérdida de referentes colectivos (la empresa, el sindicato, el centro de estudiantes) es completamente sustituida por formas de socialización barrial, como clubes deportivos, cantinas, etc. Además de no diferenciarse los comportamientos por grupos sociales, en los que el barrio no pesa igual.

indican que se renuncia con facilidad al análisis de las nuevas realidades populares (que requerirían alternativas organizativas originales)<sup>40</sup>, por la asunción de una negación tácita de la pervivencia clasista de los explotados.

En el marco de todas estas circunstancias complejas se confirma la carencia de un proyecto consistente en ideas y de construcción articulada de fuerzas sociales y políticas, con las cuales poder transformar *lo público* en lo verdaderamente *general*: los intereses de las víctimas del capitalismo, que son abrumadoramente mayoritarias. Las concepciones y las prácticas parlamentaristas han impedido a la izquierda avanzar en ese sentido.

### Las falsas contradicciones en las críticas actuales

La alternativa a la subalternidad de la izquierda parlamentarista no se halla en negar en general a los partidos, las instituciones y la construcción de poder, porque el nihilismo ideologizado no conduce a una crítica superadora.

Es necesario reconocer que la crítica difundida por la izquierda no partidaria llega a producir impactos removedores del sentido común (ideología dominante), e incluso a poner temas de debates eludidos por mucho tiempo, por ejemplo, la relación entre partido y clase, o entre partido y organizaciones sociales, en los cuales los partidos han sufrido verdaderas regresiones analíticas y políticas.

La izquierda no partidaria es heterogénea. Más allá de las coincidencias discursivas que se observan, deben distinguirse las posturas que hacen de la negación un mecanismo de deslinde político<sup>41</sup>, respecto de las cuales se agotan en el rechazo y conducen a simple marginalidad política (sin capacidad de incidencia alguna).

En cualquier caso, aún no se discute con seriedad un conjunto de problemas. Es imposible pensar en un desarrollo democrático si los procesos de organización social independiente – y la fuerza política que de ella

40. En Argentina y después en Uruguay, los desempleados han constituido organizaciones propias que reclaman participar en las centrales sindicales. Tampoco la izquierda ha sabido promover la organización de los trabajadores “informales”.

41. Véase, por ejemplo, la entrevista televisiva de Julio Scherer al subcomandante Marcos, el 11 de marzo de 2001, extractada por Romeo Pardo en “El Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en la opinión pública”, en Fabiola Escárzaga y Guillermo Michel, *Sobre la marcha*, México: UAMxochimilco-Rizoma, 2002. Los cuestionamientos agudos e incisivos de Marcos terminan en dicotomías muy discutibles: partido *versus* organización política; político *versus* rebelde social; rebelde social *versus* revolucionario; democracia *versus* poder, etc., que de todos modos son relativizados por la práctica política del EZLN, muy creativa.

resulta— no se dirigieran a transformar la institucionalidad que garantiza la reproducción de la dominación capitalista, para construir una que garantice la permanencia de la inclusión de las mayorías sociales. Si un verdadero proceso de emancipación es aquel que rompe con la separación —e incluso la contradicción— creada por el capitalismo entre el productor y el ciudadano, la democratización que se impulsa “desde abajo” debe alcanzar a las instituciones del Estado.

El Estado cristaliza las relaciones de fuerza existentes en la sociedad. Y lo que el Estado latinoamericano expresa hoy en su patrimonialismo neooligárquico es la debilidad persistente del trabajo frente al capital, da cuenta de que aún no se logra recomponer las fuerzas sociales destruidas por el neoliberalismo. Pero la recomposición de estas fuerzas es mucho más difícil si el Estado impone, con su fuerza punitiva, nuevas formas legales de exclusión antidemocrática (leyes laborales y educativas, políticas fiscales regresivas, utilización de recursos públicos al servicio del capital, etc.). Y debe quedar claro que los ultraneoliberales están haciendo uso de esa fuerza legal, incluso, para *compensar sus debilidades de representación política con represión*: la criminalización de la protesta, la judicialización de los despojos, la protocolización de la injerencia imperialista, etcétera.

En efecto, el problema del poder, que es el problema de la política, no se limita a lograr el control del aparato estatal en sí (y menos sólo el gubernamental), sino que refiere a la transformación profunda de las relaciones sociales, que son económicas y por tanto políticas (como política es la explotación capitalista), para que estas nuevas correlaciones de fuerza puedan rehacer lo público en sentido democrático. Pero son procesos articulados sobre todos los ámbitos de la sociedad, en los cuales ningún avance en cada uno de ellos puede desecharse.

Hasta ahora nadie ha podido demostrar que esto pueda hacerse sin organizar una voluntad colectiva con objetivos de transformación precisos, que no es lo mismo que la sumatoria de individualidades aisladas bien intencionadas. Gramsci advertía que lo de menos es el nombre que se le asigne a la organización, porque también está “el partido de los que no quieren partido”<sup>42</sup>. Pero debe reconocerse que hay todo un campo para indagar, puesto por los sectores de izquierda no partidaria sin claridad conceptual pero con una indudable potencialidad heurística, como es el de hallar formas de organización colectiva que garanticen, desde sus

---

42. Los teóricos de la sociedad de redes, más allá de sus discursos aparentemente progresistas, comulgan con la dispersión social que propugna el liberalismo conservador. Su rechazo tajante a cualquier forma de organización refuerza la prédica del conformismo individualista. Otra cosa es la perspectiva de ampliación horizontal de las articulaciones sociales y políticas populares por medio de redes de organizaciones.



cimientos, la emancipación de cada ser humano, como fundamento de la diversidad. Pero todo está por discutirse en nuestra región.

### Aclaraciones finales

Las propuestas analíticas presentadas aquí no admiten una conclusión oclusiva. A pesar de su densidad problemática, apenas son indicadoras, e incluso de manera insuficiente, de la complejidad de fenómenos por considerar en el análisis de la política latinoamericana actual.

A pesar de que sitúan la reflexión más allá de los parámetros éticos individualizados con que se encara el desprestigio de la política, de ninguna manera excluyen la pertinencia temática de la relación entre política y ética. Tampoco desconocen que los aspectos biográficos, psicológicos y culturales de los actores políticos, considerados individualmente, son aspectos de los entramados episódicos que forman parte de las coyunturas, pero que por sí mismos no las definen ni explican. En todo caso, la relación entre ética y política no es abstracta ni general, está referida a las dimensiones ideológicas de las relaciones de dominación. Y es precisamente en este plano en el que se convoca a discutir las concepciones de la política que, más allá de las intenciones de los sectores críticos con el orden social actual en América Latina, demuestran aún la hegemonía ideológica liberal conservadora en nuestras sociedades.

El señalamiento de los déficit teóricos en los análisis políticos actuales de ningún modo sitúa las soluciones a los problemas referidos antes sólo en el plano de la construcción intelectual. Ésta es una condición imprescindible pendiente, pero insuficiente, entre otras razones, porque para que las ideas contribuyan a transformar la realidad tienen que ser convertidas en acción consciente por los sujetos sociales y políticos. La arrogancia academicista suele negarlo y subestima el potencial cognoscitivo de las experiencias sociales y políticas concretas, que en América Latina son hoy una fuente de reflexión e interpelación para todos: partidos, dirigentes sociales, e intelectuales.

•

FECHA DE RECEPCIÓN: 30 / 10 / 2004  
FECHA DE APROBACIÓN: 08 / 09 / 2005